

Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En estos autos RIT O-459-2022, RUC 2240442450-9, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, por sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se acogió la demanda por despido indirecto y nulo, y cobro de prestaciones, deducida por doña Jeanet del Carmen San Martín Lagos en contra de la Municipalidad de Chillán Viejo.

La demandada presentó recurso de nulidad que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Chillán mediante sentencia de dos de agosto de dos mil veintitrés, por lo que invalidó la de instancia y decidió, en la de reemplazo, dar lugar la referida demanda sólo en lo que concierne al pago del feriado proporcional adeudado, desestimándola en lo demás.

En contra de esta decisión, la demandante dedujo recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer estos autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más sentencias firmes emanadas de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe contener fundamentos plausibles, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos ejecutoriados que se invocan como criterios de referencia.

**Segundo:** Que la materia de derecho propuesta consiste en determinar “*si el no pago de las cotizaciones de cesantía durante algunos meses -cinco- durante toda la relación laboral era un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador que ameritaba ejercer el despido indirecto teniendo como consecuencia la concesión de indemnización y la aplicación de la nulidad del despido entre otras*”.

Para la recurrente, las normas infringidas y de disímil interpretación, tal como se advierte de la lectura de los fallos de contraste que acompaña, son los artículos 58, 160 número 7, 162 y 171 del Código del Trabajo, y 10 de la Ley N°19.728, en los que se decidió que un incumplimiento previsional da lugar al despido indirecto, constituyéndose en causal suficiente para finalizar la relación laboral, por lo que resulta procedente la demanda y el cobro de las prestaciones reclamadas.

**Tercero:** Que, en forma previa, se deben revisar los hechos establecidos en la instancia:



1.- La demandante, doña Jeanet del Carmen San Martín Lagos, celebró un contrato de trabajo con la municipalidad demandada de carácter indefinido, permaneciendo vinculadas las partes, sin solución de continuidad, desde el 1 de enero de 2013 al 2 de noviembre de 2022, desempeñándose como auxiliar de servicios menores, percibiendo, como última remuneración mensual, la suma de \$577.124.-

2.- La relación laboral terminó por despido indirecto de la demandante, decisión que fundó en la causal contenida en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, por cuanto la demandada no enteró las cotizaciones correspondientes al seguro de cesantía de octubre y noviembre de 2015, y enero, febrero y marzo de 2015, que efectivamente se encontraban impagas a esa fecha.

3.- La demandada, mediante depósito bancario de 29 de diciembre de 2022, pagó \$471.961, suma que corresponde a la deuda previsional generada en tales meses.

**Cuarto:** Que, para la Corte de Apelaciones, se debe analizar si el incumplimiento contractual descrito, constatado en cinco de los ciento cuatro meses de duración de la relación, se puede calificar como uno de carácter grave, teniendo presente la forma y oportunidad en que fue enterada la obligación pendiente, desestimando la pretensión de la demandante, porque se trata de pocas cotizaciones que no comprueban un comportamiento reiterado de la empleadora, consistente en infringir la legislación laboral, sosteniendo que la ocasionalidad de la falta imputada no es determinante para alcanzar tal extremo, que, asimismo, pudo reclamarse por otras vías, en especial a través de una fiscalización administrativa, sin que se evidenciara algún perjuicio a la trabajadora, lo que igualmente diluye la concurrencia de la causal de despido indirecto invocada.

**Quinto:** Que, para acreditar la disparidad jurisprudencial, la demandante acompañó las sentencias dictas por esta Corte en los autos Rol N°31.913-2019, de 22 de enero de 2021, y por la Corte de Apelaciones de Santiago en el ingreso N°451-2017, de 1 de junio de 2017.

En la primera, luego de transcribir lo dispuesto en los artículos 58 del Código del Trabajo, y 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, se sostuvo que *“la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija”, “entonces, conforme a lo razonado en los considerandos anteriores y en la decisión ofrecida para su cotejo*



*con la impugnada, se yergue como conclusión irredargüible la procedencia de la acción de despido indirecto ante el no pago, por parte del empleador, de la cotizaciones de seguridad social, aun cuando se trate sólo de algunos meses dentro de una relación laboral extensa, máxime si no se han argumentado razones de naturaleza extraordinaria que pudieran explicar o justificar el incumplimiento, que dadas las consecuencias que acarrea al trabajador, sólo puede ser calificado de grave, por lo que permite configurar la causal de terminación de contrato prevista en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, que conforme al artículo 171 del mismo cuerpo legal puede ser esgrimida por el trabajador en contra del empleador y cuya consecuencia es el pago de las indemnizaciones y recargos legales consecuentes”; agregando, a continuación que “habiéndose acreditado que a la fecha del despido indirecto el empleador no había pagado las cotizaciones de seguridad social devengadas durante los meses de enero a marzo de 2018, y que con posterioridad sólo efectuó pagos parciales, que no lograron satisfacer a cabalidad la citada obligación legal, que tiene por objeto asegurar el sustento futuro de los trabajadores, una vez que se acogen a jubilación, como, asimismo, las prestaciones de salud y otros beneficios específicos, aparece que la omisión en el cumplimiento de tal deber configura un incumplimiento grave, que justifica el despido indirecto planteado”.*

*En la segunda sentencia se determinó que “la calificación como grave del hecho establecido, consistente en que la demandada no pagó las cotizaciones previsionales del actor en AFP Habitat, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2015, surge de considerar que a la fecha del autodespido, esto es el 24 de octubre de 2016 tales cotizaciones no se encontraban pagadas, que éstas solo se solucionaron el 4 de noviembre de 2016, lo que unido a tratarse de un imperativo legal de cargo de la empleadora, y al hecho de originar la adopción de la medida más grave y onerosa que contempla el ordenamiento laboral, toda vez que importa la ruptura del vínculo contractual, que desde el punto de vista material significa verse privado de su fuente de sustento de manera intempestiva, afectando tanto al trabajador como a su familia determinó la conclusión de la sentenciadora. Estima esta Corte acertados los criterios y fundamentos antes expuestos, pues ellos relevan la importancia que el derecho fundamental de la seguridad social, regulado en la Ley 17.322 y DL 3.500, tiene en las relaciones laborales, así como su impacto particular en la situación del actor, al motivar una decisión que lo privó de la fuente de su sustento”.*

**Sexto:** Que, de lo expuesto, se advierte que concurre el requisito de disparidad jurisprudencial previsto en el artículo 483 del Código del Trabajo, que



habilita a esta Corte a decidir cuál de las interpretaciones divergentes es la correcta.

**Séptimo:** Que, como esta Corte ha señalado reiteradamente (Rol N°2.405-2018 y 43.658-2020), la figura del auto despido o despido indirecto contemplada en el artículo 171 del Código del ramo, está concebida para el caso que sea el empleador el que incurre en una causal de término del contrato por los motivos indicados en la ley, de manera que se radica en la persona del trabajador el derecho a cesar su continuación y a solicitar a la judicatura que ordene el pago de las indemnizaciones correspondientes con los incrementos legales; si el tribunal rechazare el reclamo deducido, se entenderá que tal vinculación terminó por renuncia del dependiente.

Tal institución pone de relieve la naturaleza bilateral de la relación contractual, que obliga al empleador a cumplir las obligaciones que le surgen de su vinculación con el trabajador, dotando a éste de un mecanismo de salida en caso de incumplimiento mediante su notificación al infractor, alegación sujeta a la comprobación de los hechos fundantes que harán procedentes las prestaciones reclamadas. Lo relevante del despido indirecto es que responsabiliza al empleador de la pérdida de la fuente laboral del trabajador, resguardando de alguna manera el principio de estabilidad en el empleo, en virtud del cual la ley regula las causales de terminación del contrato y establece los mecanismos de compensación para el caso que aquél no las respete. No se trata, por tanto, de una renuncia –que constituye un acto voluntario, libre y espontáneo– sino de una situación provocada por el empleador, causa de la desvinculación del dependiente, a quien se reconoce el derecho a obtener las reparaciones propias del despido injustificado.

**Octavo:** Que, asimismo, se ha resuelto por esta Corte que el Código del Trabajo contiene una serie de normas destinadas a proteger las remuneraciones. Así, su artículo 58, impone, entre otras, la siguiente obligación: *“El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...”*.

Tal descuento para los efectos de la seguridad social es perentorio según lo estipula el artículo 17 del Decreto Ley N°3.500, al prescribir que *“Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...”*.

El artículo 19 del referido texto estipula que *“Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador [...] en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador,*



*dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...”, agregando su inciso segundo que, “Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...”.*

Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que afecta las remuneraciones de los trabajadores que es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional respectivo, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde sufragar, dentro del plazo que la ley fija.

**Noveno:** Que, entonces, conforme a lo razonado, se alza como conclusión necesaria la procedencia de la acción por despido indirecto ante el no pago por parte del empleador de la cotizaciones de seguridad social, aun cuando se trate sólo de algunos meses dentro de una relación laboral, más aún si no se dieron razones de naturaleza extraordinaria que pudieran explicar o justificar el incumplimiento, que dadas las consecuencias que acarrea al trabajador, sólo puede ser calificado de grave, lo que permite configurar la causal de terminación del contrato prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, que conforme a su artículo 171, puede ser esgrimida en contra del empleador, cuya consecuencia es el pago de las indemnizaciones y recargos legales consecuentes.

**Décimo:** Que, por consiguiente, y entrando al mérito de la demanda planteada y sobre la base de la calificación jurídica desarrollada anteriormente, habiéndose acreditado que a la fecha del despido indirecto el empleador adeudaba las cotizaciones correspondientes al seguro de cesantía de octubre y noviembre de 2014, y enero, febrero y marzo de 2015, se configura la omisión descrita en las citadas disposiciones, constitutiva de un incumplimiento grave que justifica el despido indirecto planteado por la actora.

**Undécimo:** Que, por estos motivos, se debe dar lugar al recurso de unificación deducido por la demandante y anular el fallo impugnado, puesto que la correcta doctrina se contiene en los acompañados, cuyos razonamientos resultan coherentes con los desarrollados en la presente decisión, advirtiéndose, por tanto, que la de instancia efectuó una correcta calificación jurídica de los hechos establecidos, por lo que el de nulidad basado en la causal contenida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo fue erróneamente acogido por la Corte de Apelaciones de Chillán, fundamentos que resultan suficientes para desestimar la invocada.

**Duodécimo:** Que, en relación a la causal de nulidad deducida en subsidio, contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, las mismas razones aportadas



permiten colegir que la sentencia del grado tampoco infringió lo dispuesto en su artículo 160 número 7, que fue entendido de acuerdo con la interpretación que esta Corte considera correcta, referida, en especial, a la gravedad atribuida al incumplimiento previsional en que incurrió el empleador, sin entender de qué forma se inserta en este razonamiento la regla contenida en su artículo 430, que asimismo se denuncia quebrantada, cuyo propósito, según se desprende de su tenor y ubicación, se refiere, más bien, a las potestades entregadas por la ley a la judicatura para evitar y sancionar actuaciones maliciosas o dilatorias en el proceso, aspecto sobre el cual la recurrente no aportó antecedentes que permitieran afirmar que la demandante desarrolló conductas de ese carácter durante el desarrollo del juicio y se deban corregir en esta sede.

**Decimotercero:** Que, por último, se denuncia un cálculo erróneo en la determinación del monto de la indemnización por años de servicios impuesta a la recurrente, sosteniendo que la actora prestó servicios durante nueve años, vulnerándose de esta forma lo dispuesto en los artículos 162 inciso cuarto, 163 inciso segundo y 171 del Código del Trabajo, defecto que no se advierte al revisar los hechos establecidos y el cálculo realizado en el fallo que se revisa, desde que la vinculación entre las partes se prolongó desde el 1 de enero de 2013 al 2 de noviembre de 2022, extendiéndose por nueve años y diez meses aproximadamente, lo que explica que la condena impuesta sea equivalente a la multiplicación de la última remuneración mensual pagada a la demandante - \$577.124- por diez.

**Decimocuarto:** Que, de lo expuesto, se desprende que el recurso de unificación de jurisprudencia resulta procedente, razón que obliga a invalidar la sentencia impugnada, porque la correcta interpretación de las disposiciones aplicables, según se explicó, se contiene en la de instancia, y teniendo presente que los restantes defectos denunciados en el de nulidad tampoco concurren, se debe concluir que tal pronunciamiento no es nulo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandante contra la sentencia de dos de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que, en consecuencia, se invalida, decidiéndose, en su lugar, que se rechaza el de nulidad que presentó la demandada contra la de instancia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y devuélvase.

N°204.952-2023.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Soledad Melo L., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G. Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

